



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: CLAUDIA PATRICIA PÉREZ GARCÍA
Demandados: ACP COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN
Radicado: 05001 31 05 024 2021 00317 01
Sentencia: S-049

AUTO

Se reconoce personería judicial para actuar al Dr. OCTAVIO ANDRÉS CASTILLO OCAMPO para representar a PORVENIR S.A. en el presente proceso, quien se identifica con T.P. N° 380.131 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. al igual que el grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de julio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

CLAUDIA PATRICIA PÉREZ GARCÍA demandó a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos, la devolución a Colpensiones de todas las sumas de dinero, así como la reactivación de la afiliación a esa entidad. Pretende además se condene en costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 23 de diciembre de 1964, cuenta con 1299 semanas cotizadas, luego de la entrada en vigencia el sistema general de pensiones fue afiliada a la AFP COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A. y posteriormente a BBVA HORIZONTES hoy PORVENIR S.A.; laboró en la empresa SIRPARTS entre el 4 de agosto de 1994 hasta el 31 de enero de 1995, suscribiendo formulario de afiliación al extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- y a PORVENIR S.A., pero efectuando el pago de aportes de manera efectiva ante el Seguro Social.

Refiere que no tuvo contacto con algún asesor de PORVENIR S.A., que el formulario fue proporcionado directamente por el empleador; cuando inició a laborar con la empresa COMERCIALIZADORA LA CAMPESINA, al momento de suscribir la documentación para la vinculación laboral, se le informó por un asesor de PROTECCIÓN S.A. que el ISS sería liquidado, razón por la cual todas las personas serían afiliadas al fondo privado, por lo que procedió a firmar el formulario de traslado.

Sostiene que en el año 2001 su empleador MOLINOS LA SABANERA le indicó que, para agilizar el pago de aportes al sistema de pensiones, todos los trabajadores de la empresa debían estar en el mismo fondo de pensiones, en BBVA HORIZONTES PORVENIR, suscribiendo la afiliación sin contar con asesoría comercial. Que para la afiliación al Régimen de Ahorro Individual -RAIS- no se le explicó que la pensión era por capital, los requisitos para obtener una pensión anticipada, sobre la garantía de pensión mínima y cuando operaba, cuando procedía la devolución de aportes, tampoco le hablaron sobre los aportes voluntarios y su finalidad, sobre el bono pensional, el derecho al retracto, mucho menos sobre los riesgos financieros, o sobre un comparativo entre la AFP y el Seguro Social, no le informaron sobre los factores que influyen para establecer el monto de la pensión.

Agrega que COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A. y BBVA HORIZONTES hoy PORVENIR S.A., no le brindaron al momento de la afiliación una información adecuada, suficiente, clara, comprensible para su traslado de régimen pensional, fracturándose su consentimiento informado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES dice que acepta la edad de la demandante y el contenido de la historia laboral anexa al expediente donde se identifica la afiliación al ISS; no le consta lo demás por tratarse de situaciones relacionadas con terceros que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso además a las pretensiones por cuanto la demandante se encuentra válidamente afiliada al RAIS, además no se encuentran soportes fácticos y legales para acceder a las mismas. Como excepciones propuso falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del traslado régimen, inexistencia de la nulidad o ineficacia del traslado a la AFP PORVENIR, PROTECCIÓN, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP PORVENIR y PROTECCIÓN ante COLPENSIONES en casos de ineficacia de traslado de régimen, indebida aplicación del artículo 1604 del

Código Civil, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el régimen de prima media, equivalencia del ahorro o diferencias pensionales, devolución de aportes debidamente indexados, devolución de cuotas de administración debidamente indexadas, buena de Colpensiones, prescripción, excepción innominada, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, compensación, imposibilidad de condena en costas, condena en costas y la genérica.

Por su parte PORVENIR S.A., dijo que la demandante cuenta con 1320 semanas cotizadas, que a pesar de que suscribió formulario de vinculación con esa entidad el 13 de enero de 1995, no se realizaron aportes, razón por la cual, para ese momento la afiliación con PORVENIR no se hizo efectiva. Que la actora solicitó vinculación a PORVENIR S.A. el 28 de junio de 2001, afiliación que se hizo efectiva a partir del 01 de octubre de ese mismo año. Sobre los hechos relacionados con PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, manifiesta que no le constan pues se trata de terceros ajenos a esa entidad. Niega los hechos relacionados con la falta de información de dicho fondo al momento del traslado y argumenta que en todo momento ha suministrado información suficiente y veraz a quienes han manifestado interés en vincularse a esa AFP; las afiliaciones han obedecido a la voluntad libre de los usuarios, los cuales han estado guiados por sus intereses debido a que se exponen las características del RAIS, sus ventajas y desventajas, y por ello, conocen las implicaciones de su decisión. Como excepciones propuso prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por la ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

Por su parte PROTECCIÓN S.A. acepta la afiliación de la demandante a COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A. el 06 de febrero de 1995; niega haberle dicho a la actora que el ISS sería liquidado y refiere que, al momento de la afiliación, a la actora se le brindó una asesoría amplia, correcta y clara sobre todos los aspectos del RAIS. Sobre los demás

hechos dijo que no le constan por tratarse de AFPs diferente a su representada. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda indicando que el acto de afiliación de la demandante es válido, exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, traslado de aportes a la AFP PORVENIR S.A., reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declare la ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 11 de julio de 2022, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín tomó las siguientes decisiones:

PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado efectuado en el año 1995, por CLAUDIA PATRICIA PEREZ GARCIA a COLMENA, hoy PROTECCIÓN S.A. (...)

*SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A que en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, DEVUELVA a COLPENSIONES los saldos de la cuenta de ahorro individual, con los rendimientos financieros, bonos pensionales que se encuentren o no en la cuenta de ahorro individual, que llegaron en el periodo de afiliación, el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, **con cargo a sus propios recursos.***

(...)

TERCERO: CONDENAR a PROTECCION S.A que en el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, DEVUELVA a COLPENSIONES el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo en que la demandante estuvo afiliada a PROTECCIÓN S.A, con cargo a sus propios recursos.

CUARTO: ORDENAR a COLPENSIONES, a reactivar de manera inmediata la afiliación de CLAUDIA PATRICIA PEREZ GARCIA al régimen de prima media con prestación definida, a recibir la devolución de los dineros ordenados (...)"

Por auto del 12 de octubre de 2022, el juzgado de conocimiento ordenó *"Primero: CORREGIR el Acta de Audiencia en el proceso ordinario laboral promovido por Claudia Patricia Pérez García en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección y Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir en el sentido de ordenar la indexación de los rubros enunciados en el numeral segundo de dicha acta, para todos los efectos legales el radicado del proceso es mismo 05001 31 05 024 2021 00317 00, y no 05001 31 05 024 2021 00025 00 como erróneamente quedo consignado."*

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PORVENIR S.A. presentó recurso de apelación manifestando que la vinculación de la actora se dio en cumplimiento de los requisitos legales para tal momento, a la fecha de vinculación de la actora las AFP no tenían la posibilidad de prever el alcance interpretativo dado por la Corte Suprema de Justicia frente al deber de información, la información se brindaba de forma verbal lo que permitía a los afiliados tomar una decisión de manera libre, voluntaria e informada sobre cual consideraban era su mejor opción pensional frente a sus expectativas; en el caso de la demandante decidió trasladarse a Protección S.A. porque consideraba

que conforme a lo que le fue informado era una mejor opción pensional teniendo en cuenta que el ISS se encontraba en crisis y en Protección podría tener una cuota de ahorro individual donde tendría un capital que generaría unos rendimientos, así mismo realizó unos traslados entre AFP lo que reitera su decisión de pertenecer al RAIS.

Solicita en caso de ser confirmada la sentencia, se revoque lo relacionado con la devolución de gastos de administración y seguros previsionales toda vez que se hicieron conforme a la ley y con una destinación previamente especificada para el cubrimiento de la invalidez, la sobrevivencia y las comisiones para generar buenos rendimientos de la cuenta de ahorro individual.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, el apoderado de PORVENIR S.A. presentó alegatos de conclusión en los mismos términos expuestos en el recurso de apelación, insistiendo en que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado de Régimen de Prima Media al RAIS, pues la decisión de la actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y en cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley. Sobre la condena a reintegrar a Colpensiones los valores recibidos con motivo de la afiliación, los gastos de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje al fondo de pensión de garantía mínima, dichas condenas deben ser revocadas, puesto que sus descuentos se realizaron por el mandato de la ley, han cumplido plenamente su cometido, afectan la lógica jurídica, constituyendo un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones. Por último, frente a la condena en costas señala que dicha AFP siempre obró de buena fe en cumplimiento de las disposiciones legales para la época.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP PORVENIR S.A. en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* la señora CLAUDIA PATRICIA PÉREZ GARCÍA nació el 23 de diciembre de 1964 ; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ISS- y realizó cotizaciones allí, el 01 de enero de 1995; y *iii)* el 06 de febrero de 1995 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A.; el 28 de junio de 2001 se afilió a HORIZONTES hoy PORVENIR S.A. entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada, siendo efectivo su traslado para el mes de octubre de ese mismo año.

Ineficacia del traslado.

La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la

economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008,

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;

- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la parte actora, se destaca su manifestación en torno a que el asesor de COLMENA le indicó que con la afiliación al fondo se generarían interés con el ahorro hecho en la cuenta, le insistieron que el ISS se iba a cerrar, siendo necesario continuar la afiliación en otras AFP; no le explicaron las diferencias entre regímenes, tampoco que debía acumular cierto capital para poderse pensionar, o que se generarían rendimientos, o sobre los aportes voluntarios, o si la pensión era heredable.

De esto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien, no es de recibo el argumento planteado por la AFP PORVENIR S.A. relacionado con que la demandante se trasladó dentro del mismo RAIS, lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *“... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a devolver.

De otro lado, en cuanto a ordenar también la devolución de las cuotas de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, y demás conceptos –debidamente indexados–, tema cuestionado en el recurso de apelación por PORVENIR S.A., basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelven a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

En tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la SL4964-2018, SL2877-2020, SL5595-2021 o SL1637-2022, lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)”*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Además, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Se dijo también en esa providencia:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, -incluida la indexación tal y como fue ordenado en primera instancia-², es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora CLAUDIA PATRICIA PÉREZ GARCÍA estuvo vinculada a cada entidad.

² Corte Suprema de Justicia sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826.

Finalmente, otro tema que cuestiona el apoderado de PORVENIR S.A. en los alegatos de conclusión tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo, sin embargo, dicha AFP PORVENIR no fue condenada en costas en la primera instancia, razón por la cual, no se realizara pronunciamiento alguno al respecto.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. cuyas agencias en derecho se fijan por el valor de \$1.160.000 y a favor de la demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el día 11 de julio de 2022, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. cuyas agencias en derecho se fijan por el valor de \$1.160.000 y a favor de la demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fee5f31d7c64dce0b8edc923a3af036f99c005e988b103387eef564bc93cc725**

Documento generado en 02/03/2023 03:11:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>